

Propuesta de ponencia individual titulada:
El impacto de la tecnología en los delitos electorales
Impact of technology on electoral crimes

Autor: **Gilberto Pablo De Hoyos Koloffon**, Maestro en Derecho por la Georgetown University y Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León.

Resumen

Las herramientas tecnológicas revolucionaron la vida de los seres humanos, facilitando un gran número de tareas y trabajos que anteriormente representaban una mayor inversión económica o de tiempo. Estos adelantos se han reflejado en diversas áreas como las comunicaciones, la salud, la educación, la economía, entre otras, destacando que el tema electoral no es ajeno a sus efectos.

En México, el uso de tecnología en los procesos electorales es escaso, toda vez que aún se debate sobre si su uso será benéfico o, por el contrario, aumentará la desconfianza de la ciudadanía. No obstante, ya contamos con antecedentes, siendo el caso más reciente los comicios del año 2020 en los estados de Hidalgo y Coahuila.

Pero aunado a estos avances, surgen nuevas formas de cometer ilícitos, motivo por el cual, es necesario abrir el debate sobre el impacto en los delitos electorales, buscando generar líneas de acción que podrán seguir las Fiscalías Especializadas en la materia, en aras de perseguir estas conductas que atentan contra el adecuado desarrollo de la función pública, así como del voto libre y secreto.

En ese orden de ideas, resulta necesario identificar los escenarios actuales de delitos electorales cometidos utilizando la tecnología y visualizar aquellos que podrían presentarse a futuro.

Introducción

El avance científico y tecnológico ha llegado también a los procesos comiciales. Con el uso de las herramientas como la urna electrónica, algo que anteriormente parecía increíble, ahora es toda una realidad en algunas secciones electorales del país.

En efecto, el uso de internet en México ha aumentado durante los últimos años. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente hay 80.6 millones de usuarios de Internet, lo que representa el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4%).

Las principales actividades de los usuarios de Internet en el año 2019 correspondieron a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicación (90.6%).

Derivado de esta situación, se ha modificado la manera en que los partidos políticos y candidaturas comunican a la ciudadanía sus plataformas y proyectos. Así, surgen nuevos retos para las autoridades encargadas de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral, tal como sucede con los ilícitos que son cometidos a través de medios electrónicos.

En tal virtud, el trabajo se desarrollará de la siguiente manera: iniciará con un breve repaso de las herramientas electrónicas empleadas en otras naciones dentro de sus procesos comiciales, para posteriormente abordar los antecedentes en México, destacándose las implicaciones positivas y negativas que se consideran inherentes a su ejecución. Por último, se efectuará un ejercicio de visualización de escenarios, con el fin de analizar los delitos electorales cometidos utilizando la tecnología que se han detectado actualmente, así como aquellos que se vislumbran a futuro.

Breves antecedentes internacionales del uso de las herramientas electrónicas

Como antecedente a nivel internacional, se destaca que desde la década de los sesenta, diversos países han aprovechado los sistemas electrónicos para recabar las votaciones.

Ciertamente, en el Reino Unido, Estonia y Suiza, se han usado en elecciones legislativas, gubernamentales y referéndums; en Canadá, para la renovación de los municipios; mientras que en Francia y Estados Unidos, respecto a comicios legislativos y presidenciales; incluso Brasil, la India y Venezuela, ya han implementado sistemas de voto electrónico, no obstante, que se trata de países en vías de desarrollo (Téllez, 2010: 23 y 30).

Aunque son muchos los ejemplos, para los fines de este análisis haremos hincapié en el caso de Bélgica, por considerarlo uno de los países europeos pioneros en el tema, siguiendo lo indicado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco:

- Comenzó con la aplicación de sistemas de voto electrónico en el año de 1989, basándose en lo siguiente:
 - En tarjetas de banda magnética los datos se grababan con la ayuda de una pantalla táctil y un lápiz óptico.
 - Posteriormente, se introducían las tarjetas en urnas electrónicas que computaban automáticamente los resultados.
- Fue en el año de 1994, cuando el voto electrónico se estipuló en su marco normativo.
- Durante el año 2010, comenzaron un proceso para elegir nuevo sistema, basado en una urna electrónica con pantalla táctil y con posibilidad de imprimir

un comprobante del voto en papel, en aras de realizar el recuento de los resultados.

- Es en el año de 2014, llevándose a cabo las elecciones al Parlamento Europeo, Regional y Federal, que se utilizó un sistema de voto electrónico totalmente automatizado y verificable.
- En el año de 2018, las nuevas máquinas de votación (A4-517) y “máquinas de presidente” (VIU-805), fueron agregadas a la plataforma de votación automatizada. Además, los colegios electorales en dos municipios, activaron y utilizaron la tecnología de asistencia de Smartmatic, que proporciona instrucciones de audio para ayudar a los votantes con discapacidades visuales a escrutar la papeleta y votar de forma independiente.
- En las elecciones del 25 de mayo de 2019, al Parlamento Federal y al Parlamento Europeo, el elector tenía la certeza de la trazabilidad de su voto electrónico, porque al momento de votar la máquina le expedía una papeleta encriptada, que podía corroborar a través de un lector antes de depositarla en una urna. El software a través de los algoritmos del sistema de votación no permitía violar la confidencialidad del voto.

A pesar de que cada vez son más el número de países que integran estas herramientas en sus procesos comiciales, la mayoría de las naciones se resisten a la utilización de un sistema electrónico para la captación del voto ciudadano, ya sea por desconfianza, por las dudas sobre la fiabilidad del recuento de votos, o bien, debido a temas presupuestarios.

Antecedente nacional

Por su parte, en México dicho instrumento se ha implementado en algunas secciones de las entidades federativas de Jalisco, Coahuila y el otrora Distrito Federal. Cabe

destacar, que el estado de Coahuila fue el primero en implementar la urna electrónica en ciertos municipios, durante los comicios de los años 2005, 2008 y 2009.

Inclusive, con relación al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, nuestra legislación electoral establece dos formas para ejercerlo, a saber: por correo, mediante la entrega de la boleta en la embajada o consulados, y por vía electrónica (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 329).

En cuanto a esta última vía, citamos el ejemplo del entonces Distrito Federal, donde se utilizó para la elección de Jefe de Gobierno, durante el proceso electoral ordinario 2011-2012. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decretó que los mecanismos que se aprobaron para recabar el voto de los ciudadanos en el extranjero en dicha elección, cumplieron con los sistemas, medidas o candados de seguridad, físicos y técnicos que permitieron respaldar y avalar la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

De igual forma, determinó que las medidas previstas por la autoridad administrativa electoral fueron suficientes, necesarias, idóneas y proporcionales a efecto de garantizar el voto de la ciudadanía, considerando que se cumplió con los principios rectores de la función electoral, así como con las características que deben regir el derecho a votar, así como las formalidades legales del proceso relativo a su emisión y escrutinio (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JRC-306/2011).

Otro antecedente del uso de herramientas tecnológicas en materia electoral, se dio en el caso de los aspirantes a una candidatura independiente para el proceso federal 2017-2018, quienes recibieron el apoyo ciudadano mediante una aplicación móvil. Es de recalcar, que este procedimiento también fue adoptado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para el caso local del mismo periodo (INE, Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el proceso

electoral federal 2017-2018). Situación que fue replicada en el proceso comicial 2020-2021.

El suceso más reciente deriva de los Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en ciertas secciones de los Estados de Coahuila e Hidalgo durante el proceso electoral 2019-2020. Acorde con esos Lineamientos, el Instituto Nacional Electoral implementó la urna electrónica en ciertas secciones de esas entidades federativas para la recepción del voto, con lo que se sustituyó el mecanismo tradicional de la boleta impresa.

Un aspecto por de más relevante de estos Lineamientos, versa en su señalamiento que, no obstante que la recepción del voto mediante el sistema aludido no se encuentra estatuido en nuestra legislación, jurídicamente es posible siempre y cuando se respeten las características esenciales de la emisión del voto constitucional y legal. Del mismo modo, mencionan que no se advierte ni en la ley o en instrumento alguno, que la boleta electoral y la urna deben elaborarse exclusivamente con un material en específico, abriendo la posibilidad de que pueda contarse con herramientas tecnológicas.

Para la evaluación del ejercicio en estos Estados, se realizaron encuestas (Instituto Nacional Electoral, Informe integral de la evaluación de la implementación del proyecto de Voto Electrónico durante los PE 2019-2020) cuyos principales resultados son:

- Al 91% de la ciudadanía encuestada le resultó fácil usar las urnas electrónicas.
- Al 80% de la ciudadanía encuestada le resultó rápido el modelo de votación con urna electrónica; y al 85% le gustaría volver a utilizar las urnas electrónicas en próximas elecciones.

- El 92.87% de los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, Representantes de Partidos Políticos y Observadores Electorales encuestados, manifestaron su preferencia por utilizar la urna electrónica en las siguientes elecciones.

Aspectos positivos y negativos del uso del voto electrónico

A propósito de esta implementación en Coahuila e Hidalgo, se vuelve necesario hacer referencia al debate creciente sobre la utilización de las herramientas tecnológicas en los procesos electorales.

En principio, puntualizaría que estas tecnologías mantienen críticos, detractores y defensores que argumentan los beneficios y las complicaciones que un sistema de esta naturaleza podría traer a la democracia mexicana (Gómez, 2013: 207-208), pero en aras de lograr un análisis objetivo, se procede a describir los aspectos positivos y negativos relativos a su implementación, de acuerdo con la doctrina (Téllez, 2010: 33-35).

Aspectos positivos

- **Celeridad en los resultados del proceso electoral.** Al emplear este sistema, se obtendrían datos fiables y rápidos sobre los votos emitidos. De esta manera, los resultados oficiales se darían a conocer pocas horas después del cierre de las casillas.
- **Reducción de las erogaciones en material electoral.** Con la urna electrónica se aminoraría los gastos en boletas electorales, actas de escrutinio y cómputo, urnas, mamparas, artículos de papelería o material de empaque, y el resto del equipamiento que actualmente se utiliza en las casillas durante la jornada electoral.

- **Disminución de las cargas de trabajo y errores humanos.** Con su aplicación se aligerará la carga de trabajo de los funcionarios electorales y se podrán reducir los errores humanos, así como simplificar las tareas que se llevan a cabo en las casillas.
- **Cuidado del medio ambiente.** Al dejar de imprimirse el papel para las boletas electorales y el cartón utilizado para las urnas, se propicia un beneficio ecológico.

Aspectos negativos

- **Desempleo.** Al introducir diversos instrumentos electrónicos, se reducirá la cantidad de personas que se requieren para desarrollar un proceso electoral, situación que provocaría despidos o disminución en la generación de fuentes de trabajo –similar a lo acontecido durante la Revolución Industrial–.
- **Alta inversión económica inicial.** Implica una inversión importante, debido al alto costo que tiene la adquisición del hardware y software necesario, así como su mantenimiento, licencias y capacitación para su uso. Adicionalmente, debe contemplarse su resguardo entre un proceso electoral y otro.
- **Riesgo de ataques informáticos.** Si no se cuenta con una adecuada estructura de seguridad informática, tales como programas de antivirus o *firewalls*, se pueden presentar ataques cibernéticos o manipulación de los resultados.
- **Necesidad de adecuaciones legislativas.** Si bien, como lo expresamos previamente, no existe prohibición legislativa para el uso de este tipo de herramientas, es absolutamente necesario que el resto de ordenamientos electorales, administrativos, jurisdiccionales y penales, se adecuen a fin de reglamentar el uso de las herramientas tecnológicas.

- **Desconfianza del electorado.** Al ser una sistema nuevo, muy probablemente el electorado se mantendría escéptico en cuanto su fiabilidad, con motivo de la resistencia natural que existe al cambio.

A pesar de los referidos aspectos negativos, en la práctica las ventajas que conlleva la implementación de las herramientas tecnológicas en los sistemas electorales, ha tenido una mayor ponderación. De hecho, tenemos ejemplos de la aplicación exitosa de los sistemas electrónicos, no solo en México sino en otros países, obteniéndose resultados rápidos y seguros, que garantizaron los principios rectores de la función electoral, como lo son la independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 y 116); y de manera análoga, respetaron las características del voto, esto es, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible (Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, artículo 4).

Incluso, entre las implicaciones positivas a destacar, se encuentra la agilización del procedimiento de votaciones y la publicación de los resultados de la elección, así como la posibilidad de evitar la nulidad de casillas por causales específicas como el error o dolo en el escrutinio de votos.

Precisamente, con la llegada de la nueva tecnología para la captación del sufragio, no solo se garantizan los aspectos positivos que han quedado descritos, sino que pueden suprimirse ciertos riesgos de fraude (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2011:6).

No obstante, aunque estas tecnologías expanden las fronteras y ofrecen nuevas posibilidades para los procesos electorales, especialmente en cuestiones de logística electoral, podrían involucrar riesgos no previstos (Ace Project, consultado en julio de 2021).

En tal virtud, resulta de suma importancia que se analicen las implicaciones que trae consigo el uso de estas herramientas tecnológicas en la comisión de los ilícitos electorales.

Delitos electorales cometidos por medios electrónicos

Los delitos electorales son todas aquellas conductas que vulneran el adecuado desarrollo de la función electoral, los principios de imparcialidad, separación iglesia-estado, equidad en la contienda, de libertad y de secrecía del voto, así como la consulta popular.

Se encuentran tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de aplicación en toda la República Mexicana, y cuya finalidad, en general, consiste en proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral.

Esta función pública, se ha definido como la especificación normativa de una actividad primordial del Estado referida a la organización, realización y calificación de las elecciones como mecanismo de integración de los órganos representativos del poder público (Astudillo y Córdova, 2010:1).

Ahora bien, dentro de la aludida Ley General, encontramos distintos tipos penales que prevén su comisión a través de cualquier medio –dentro de los que se encuentran los electrónicos–, los cuales se enuncian a continuación:

- Artículo 7, fracción XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.

- Artículo 7, fracción XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.
- Artículo 11, fracción V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.
- Artículo 13, fracción I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

Por otra parte, aunque existen otros tipos penales que no mandatan expresamente el uso de las tecnologías de la información, a la fecha se han presentado denuncias sobre posibles conductas constitutivas de delito electoral haciendo uso de dichas herramientas, conforme a lo siguiente:

- Artículo 7, fracción VII (compra de votos). Este tipo penal prevé una sanción de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. Como se puede apreciar, no se requiere de un medio específico a través del cual se puede hacer esta solicitud de voto, de manera que, por ejemplo, si alguien utiliza una red social o de mensajería instantánea para solicitar el voto por determinada opción política a cambio de alguna contraprestación, encuadra en la conducta descrita.
- Artículo 20 Bis, fracción VIII. Refiere que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o interpósita persona, publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una

mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. De tal modo que, si alguna persona, aunque no haya escrito el mensaje, lo comparte en sus redes sociales, podría encuadrar dentro de la normal penal en alusión.

- Artículo 11, fracción IV. Relacionado con la imposición de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años, para el servidor público que proporcione apoyo o preste algún servicio a una precandidatura, partido político, coalición, agrupación política o candidatura, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en horario de labores. En este caso, se hace referencia a personas servidoras públicas que de forma generalizada, durante su horario de labores, hacen uso de las redes sociales personales, para compartir información sobre una candidatura.

En estos casos, los principales retos a los que nos enfrentamos, consisten en comprobar, primeramente, que una persona es quien maneja una determinada cuenta y, segundo, que fue ella quien efectuó la conducta delictiva.

Por ende, las estrategias que se están implementando para la investigación de este tipo de acciones son:

- Localizar la dirección IP desde la cual se ingresó a la cuenta en cuestión. La Dirección IP (*Internet Protocol*) hace referencia a un identificador numérico único usado para especificar anfitriones y redes. Los números IP son parte de un plan global y estandarizado para identificar computadores que estén conectados a Internet. Se expresa como cuatro números del 0 al 255, separado por puntos: 188.41.20.11. (Acurio del Pino, 2016, p.61).
- Verificar si hay algún dato ligado con la cuenta, como puede ser un correo electrónico o un teléfono celular.

- Buscar si la página tiene perfiles que actúen como moderadores o administradores.

Con tales actividades, aunadas a los actos de investigación definidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se busca combatir los ilícitos de esta clase.

Prospectiva de delitos electorales cometidos a través de medios electrónicos

El hecho de que las conductas descritas en el apartado anterior, sean las que actualmente se están detectando, no implica que se vayan a mantener estáticas, sino que, por el contrario, es altamente probable que en un futuro puedan variar o incrementarse, considerando la rapidez con que evolucionan las herramientas tecnológicas.

En consecuencia, es fundamental que todas las organizaciones se preparen para lo que el futuro pueda deparar. Esta necesidad es más acuciante en el caso de los organismos encargados de la aplicación de la ley, que tienen el imperativo de diseñar estrategias proactivas para combatir el abanico de desafíos planteados por las nuevas tendencias delictivas (Interpol, 2020).

En ese orden de ideas, se plantean diversos escenarios, basados en los tipos penales actuales, que consideramos pueden presentarse en los procesos electorales venideros:

- El robo de identidad electrónico, con fines electorales. Con el objetivo de evitar ser descubiertos, los posibles sujetos activos podrían generar perfiles falsos, aprovechando las facilidades que otorgan los principales sitios de redes sociales y correos electrónicos para la creación de cuentas. Esta cuestión se agravaría, si el perfil falso se trata de vincular con alguna figura pública, buscando perjudicarlo.

- Los programas automatizados de envío de mensajes. Son cada vez más comunes este tipo de programas que permiten la remisión masiva de un determinado mensaje, sin la necesidad de que una persona los esté escribiendo. Al ser manejados por inteligencia artificial, el programa puede realizar alguna de las conductas previstas por la ley, pero sin un sujeto activo directo que efectúe la acción.
- La afectación a los sistemas electrónicos de captación de la votación. Si bien, este delito no sería cometido directamente por medios electrónicos, lo cierto es que ante el aumento en la utilización de urnas electrónicas, también incrementan las posibilidades de una afectación física a estas herramientas, tales como el sabotaje, daño o robo de las mismas.

Aunque son muy variados los escenarios que podrían presentarse en un futuro, los aquí mostrados se advierten con la finalidad de iniciar la conversación respecto al impacto que la tecnología puede tener en los delitos electorales, en aras de que las Fiscalías Electorales monitoreen constantemente su evolución y generen líneas de acción para combatirlos.

Conclusiones

Es innegable que los avances en la era digital están propiciando, con mayor frecuencia, el uso de la tecnología en nuestro país para apoyar a los procesos electorales.

Ejemplo de lo anterior es la aparición de las urnas electrónicas, cuya finalidad consiste en generar beneficios concretos y perceptibles para la ciudadanía en el acceso al ejercicio de sus derechos políticos, lo que conllevará a un sistema electoral garante de los derechos y principios inherentes de un Estado democrático.

Sin embargo, con estos avances también aparecen en el horizonte las conductas que buscan atentar contra el adecuado desarrollo de la función pública electoral,

apoyándose en las acciones *sui generis* que pueden generarse con motivo de las nuevas tendencias electrónicas.

Por ende, aumenta la responsabilidad de las autoridades electorales tanto federales como locales, que de acuerdo a su competencia, deben garantizar operaciones contundentes, a fin de evitar que se trastoquen los principios rectores de las elecciones.

Además, reviste de vital importancia que el andamiaje jurídico y operativo se actualice en caso de ser necesario, para que brinde certeza frente a cualquier conducta lesiva generada por el uso de estos sistemas informáticos, que tienda a erosionar la confianza en el actuar de las instituciones democráticas del Estado mexicano.

Ciertamente, el único que tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal es el Poder Legislativo, quien está facultado para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, considerando las necesidades sociales del momento histórico respectivo (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2018).

Bibliografía

Encuesta:

- Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 2019. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/#Documentacion>

Legislaciones:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en ciertas secciones en los Estados de Coahuila e Hidalgo durante el proceso electoral 2019-2020.

- Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018.

Libros, artículos académicos y páginas consultadas:

- Ace Project, Elecciones y Tecnología, Disponible en: <https://aceproject.org/ace-es/topics/et/default>. Consultado el 4 de mayo de 2021.
- Acurio del Pino, Santiago. 2016. Delitos Informáticos: Generalidades. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf. Consultado el 10 de junio de 2021.
- Astudillo, César y Córdova, Lorenzo. 2010. Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional. México, Editorial UNAM-IEPC Jalisco.
- Departamento de Seguridad, Gobierno Vasco. Voto electrónico. Voto electrónico en el mundo, disponible en: <https://www.euskadi.eus/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-mundo/web01-a2haukon/es/>. Consultado el 17 de julio de 2021.
- IDEA Internacional. 2011. Una introducción al voto electrónico. Disponible en: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/una-introduccion-al-voto-electronico.pdf>. Consultado el 18 de mayo de 2021.
- Instituto Nacional Electoral, Informe integral de la evaluación de la implementación del proyecto de Voto Electrónico durante los PE 2019-2020, disponible para consulta en: <https://www.ine.mx/urna-electronica-elecciones-locales-2020/>
- Interpol, Análisis Prospectivo Mundial, apartado “Anticipar el futuro de la delincuencia”, disponible en: <https://www.interpol.int/es/Comotrabajamos/Innovacion/Analisis-prospectivo-mundial>. Consultado el 8 de junio de 2021.
- Tellez Valdez, Julio. 2010. El Voto Electrónico. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México. Disponible en: https://www.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/14_voto.pdf

- Gómez Muñiz, Magdiel y Macedonio, Omar. 2013. El Voto Electrónico y sus aportes a la Democracia. Universidad del Valle de Atemajac. Disponible en: http://biblioteca.univa.mx/Anuario/2013/2013_8_el_voto.pdf. Consultado el 10 de junio de 2021.

Tesis y sentencia:

- SUP-JRC-306/2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/buscador/>
- Tesis: VI.2o.P. J/1 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, p. 2683.